

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Gustavo Alonso Bedoya Muriel
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 12 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 <b>012 2022 00158</b> 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 172 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de invalidez - no 50 semanas Ley 860 – No condición beneficiosa Corte Suprema y Constitucional – no 50 semanas en los últimos tres años con enfermedad degenerativa
DECISIÓN	Confirma sentencia absolutoria

Hoy, **cuatro (04) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo, y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor **Gustavo Alonso Bedoya Muriel**, contra la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario que promovió en contra de **Colpensiones**. Radicado único nacional 05001 3105 **012 2022 00158** 01.

**Auto:** en los términos y para los efectos del poder conferido, se le reconoce personería jurídica a la abogada Leidy Vanessa Garcés Mendoza, para que continúe con la representación de la demandada.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto, estudiado,

discutido y aprobado mediante acta **Nº.022**, que se se plasma a continuación:

## **Antecedentes**

El demandante convocó a juicio a Colpensiones, rogando se le reconozca la pensión de invalidez, en tanto, ha cotizado 727 semanas entre 1993 y 2021, y con esto acredita los requisitos para recibir dicha prestación desde la fecha en que se determine la pérdida de capacidad laboral. Además, solicita el pago de intereses moratorios o en subsidio, la indexación y las costas del proceso

En su sustento, argumenta que al habersele dictaminado una pérdida de capacidad laboral del 52,91%, estructurada el 12 de abril de 2021, solicitó a Colpensiones la prestación de invalidez, pero esta fue negada mediante la Resolución SUB329078 del 09 de diciembre de 2021, alegando que no cumplía con el requisito de tener 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración. Expresa que la entidad no tuvo en cuenta que le fue amputada una de sus piernas desde hace muchos años, lo que le ha impedido volver a trabajar, ya que su profesión era la de conductor. Menciona que padece de diabetes severa, lo que llevó a la separación de su miembro inferior. Por tanto, considera que es necesario realizar un análisis detallado de su situación.

En auto del 03 de junio de 2022, **se admitió y ordenó dar trámite a la acción**, debidamente notificada Colpensiones allegó contestación, en la que admite el contenido del dictamen que establece una PCL del 52,91% al actor, así como la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez elevada y la negativa a la misma en acto administrativo SUB329078. Los demás supuestos no le constan o no son hechos. **Presentó oposición a la prosperidad de las pretensiones** y formuló las excepciones de mérito

de: inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, improcedencia de la obligación de pagar intereses moratorios e indexación, prescripción, la innominada, compensación, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

**La primera instancia culminó con sentencia** proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito el 31 de mayo de 2023, en la que declaró la prosperidad del a excepción de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir. Como consecuencia, absolvió a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra e impuso costas al actor, fijando el monto de las agencias en derecho.

Adujo la falladora indicó que el actor presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, la cual fue estructurada el 11 de abril de 2021, acreditando así con el primer requisito para el reconocimiento de la pensión de invalidez. No obstante, señaló que no se demostró el cumplimiento de 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha en que se le determinó la pérdida tal y como lo establece la Ley 860 de 2003, ni observa los supuestos establecidos por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en tanto, la pérdida fue determinada fuera del límite temporal establecido por dicho órgano para el reconocimiento de la pensión, esto es, el 29 de diciembre de 2006. Tampoco supera las exigencias reguladas por la Corte Constitucional, ya que, al 1 de abril de 1994, no había cotizado 300 semanas, requisito necesario para analizar el test de procedencia previsto por dicho órgano.

Finalmente, señaló que, atendiendo a la enfermedad padecida por el señor Gustavo, la cual es catalogada como degenerativa, y aplicando el criterio determinado por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, no hay lugar al otorgamiento del derecho a, al haber dejado de aportar al sistema

el 01 de abril de 2021, evidenciándose el porcentaje determinante para considerarse inválido para el 11 del mismo mes y año, sin tener aportes posteriores y sin contar con las 50 semanas requeridas en los 3 años anteriores.

Inconforme con esta decisión, **la parte actora interpuso** recurso de apelación, solicitando su revocatoria y la consecuente concesión del derecho. Para ello indicó que el despacho desconoció el precedente constitucional frente al tema. Aclara que no pretende que se modifique la fecha en la que se le estructuró la PCL, sino que se tengan en cuenta las semanas que cotizó, considerando para ello que los últimos aportes los efectuó porque su familia le quiso colaborar con estos, no obstante, la historia refleja que hacía mucho tiempo no los realizaba debido a que era conductor y, dada la amputación, no pudo seguir laborando, supuesto que puede ser comprobado con la historia clínica.

De la oportunidad para presentar **alegaciones** en esta instancia hizo uso **Colpensiones**, resaltando que, según la historia laboral, el señor Bedoya Muriel no cumple con los requisitos para la pensión de invalidez bajo la Ley 860 de 2003, ya que solo cotizó 22 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración, así como tampoco cumplen las exigencias para aplicar una condición más beneficiosa, ya que la fecha de estructuración ocurrió después del 29 de diciembre de 2006, data hasta la cual el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 pudo continuar produciendo efectos según la jurisprudencia.

**Demandante**, argumenta que, a pesar de que no cumplió con el requisito de tener 50 semanas cotizadas antes de la estructuración de la invalidez, la Corte Constitucional ha establecido en repetidas ocasiones que, en casos que involucran a personas de especial protección, se puede inaplicar la

norma y conceder la prestación económica debido a la densidad de semanas cotizadas.

En orden a decidir, basten las siguientes:

## **Consideraciones**

Como hechos debidamente acreditados en los autos, no discutidos y que se tornan relevantes para resolver se tienen frente al señor Gustavo Alonso Bedoya se tienen: nació el 08 de septiembre de 1958. Fue calificado el 12 de abril de 2021, por parte de Colpensiones, con una **pérdida de capacidad laboral del 52,91% estructurada el 11 de abril de 2021**, siendo esta la “fecha del análisis documental por medicina laboral”. Se le valoraron los diagnósticos: hipertensión esencial (primaria), amputación traumática de pierna y dedo del pie y diabetes mellitus insulínica dependiente, estableciéndose que este tipo de enfermedad es de tipo degenerativa, progresiva o crónica. El 17 de agosto de 2021, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, negada en Acto administrativo SUB329078 del 9 de diciembre de 2021, bajo el argumento de no acreditar 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la data en la que le fue estructurado su estado y no poderse aplicar el principio de la condición más beneficiosa en términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ya que la fecha en que se determina la pérdida es posterior al límite establecido por dicho órgano para su estudio, específicamente el 29 de diciembre de 2006. La historia laboral refleja un total de 727,86 semanas cotizadas entre el 26 de octubre de 1993 y el 01 de abril de 2021.

Así las cosas, el **problema jurídico** se circunscribe a establecer si el demandante acredita a cabalidad los requisitos para ser beneficiario de la pensión de invalidez.

Pues bien, para el efecto se tiene en cuenta que la norma que gobierna la situación particular es la vigente a la fecha en que se estructura la pérdida de capacidad laboral, la cual, para el 11 de abril de 2021, es la Ley 860 de 2003, que exige una calificación superior al 50% de PCL y tener cotizadas 50 semanas en los tres años anteriores, encontrándose satisfecha la condición de invalidez por parte del actor, al haber sido calificado con una PCL del 52,91%. Sin embargo, no supera el segundo de los supuestos, es decir, las 50 semanas en los 3 años anteriores a la calenda en la que se le determina la pérdida, esto es, entre el 11 de abril de 2021 y el mismo día y mes 2018, en tanto, según la historia laboral allegada al proceso, la cual se encuentra actualizada al 13 de junio de 2022, en dicho interregno tiene 21,57 semanas cotizadas, correspondientes a los aportes efectuados entre el 01 de noviembre de 2020 al 01 de abril de 2021 por la empresa TREO SERVICIOS SAS, advirtiéndose un bache en las contribuciones a partir del 30 de septiembre de 2014. Cúmulo insuficiente para el reconocimiento y pago de la prestación reclamada.

Ahora bien, es importante destacar que órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral ha permitido, ante la ausencia normativa de un régimen de transición, la concesión del derecho bajo el cumplimiento de los requisitos consagrados en la disposición inmediatamente anterior a la norma vigente, con el propósito de garantizar y proteger a quienes, al momento del tránsito legislativo, tenían consolidada una expectativa en cuanto a la pensión. Al respecto, en decisión CSJ SL, 28 jul. 2012, rad. 38674, reiterada en SL 622-2021 y SL1305-2023, se explicó:

*Sin embargo, dada la nueva composición de la Sala, se considera pertinente*

*reexaminar el tema, sobre la inaplicabilidad de la condición más beneficiosa para dirimir los conflictos cuando la invalidez ocurre en vigencia del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, y el afiliado, al momento de su entrada en vigencia, cumple con el requisito de las 26 semanas de cotización que consagraba el modificado artículo 39 de la citada Ley 100 de 1993, para estimar que en estos casos sí procede dicho principio legal y constitucional en la sucesión de esos dos ordenamientos [...]*

*Como lo anterior implica un **cambio de criterio** de la Sala frente a la PENSION DE INVALIDEZ, cuando el estado de invalidez se estructura en vigor del artículo 1° de Ley 860 de 2003 y para el momento en que entró a regir este nuevo ordenamiento legal se tenían satisfechos los requisitos de la norma precedente, se **rectifica** y recoge cualquier pronunciamiento que en contrario se hubiera proferido, aclarando que lo expresado también tendría plena aplicación en lo concerniente a la PENSION DE SOBREVIVIENTES y la Ley 797 de 2003, para efectos de ampliar los alcances del mencionado principio legal y constitucional de la condición más beneficiosa a legislaciones posteriores a la Ley 100 de 1993.*

Definiéndose desde la sentencia SL2358-2017, una temporalidad para la aplicación de este principio, fijando un límite de tres años contados desde la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, a favor de aquellos afiliados que tenían una expectativa legítima. Por ende, la condición más beneficiosa tendría aplicación únicamente cuando la invalidez surge entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, en tanto, después de esta fecha se acude al artículo 1 de la Ley 860 de 2003, sin que sea posible observar la legislación anterior en virtud del referido postulado constitucional, es decir, aplicar de manera plus ultractiva la ley, ya que ello desconocería que las normas sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Sobre el particular, véanse entre otras las sentencias SL337-2023, SL1234-2023, SL1305-2023, SL1449-2023 y SL1526-2023.

De acuerdo con ello, al habersele determinado la merma de capacidad laboral al actor para el 11 de abril de 2021, se concluye que no es posible aplicarle la anterior regla jurisprudencial, pues se encuentra por fuera el lapso establecido para la concesión del derecho bajo el principio de la condición más beneficiosa, el cual se fijó hasta el 26 de diciembre de 2006.

Contrario a este criterio, la Corte Constitucional insistentemente ha considerado que tal interpretación si bien resulta razonable no la comparte toda vez que ni la Carta Superior, artículo 53, ni en la jurisprudencia de la Corporación, el concepto y desarrollo de la condición más beneficiosa se ha restringido el análisis de únicamente dos disposiciones normativas sucesivas llamadas a regular un caso concreto, entre otras, en sentencia SU 442 de 2016, sostuvo que es posible la implementación de la condición más beneficiosa en relación con pensiones de invalidez causadas tanto en la Ley 100 original como en la modificación introducida a tal estatuto por la Ley 860 de 2003, eventos en que considera viable la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, **siempre y cuando a la fecha de entrada en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la Ley 100 de 1993 el afiliado acredite una densidad de 300 semanas.**

No obstante, también consideró que dicho criterio debía compatibilizarse con las reglas unificadas en la Sentencia SU-005 de 2018, relativas al empleo del principio de la condición más beneficiosa para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, procediendo a unificar su jurisprudencia en la sentencia SU 556 de 2019, al no haber previsto la sentencia SU-442 de 2016, parámetros homologables para valorar la exigencia de subsidiariedad de la acción de tutela en este tipo de asuntos. Con el objetivo de otorgar seguridad jurídica en la valoración de este tipo de pretensiones y garantizar una igualdad de trato, la jurisprudencia en la sentencia antes mencionada, estableció los requisitos que debían acreditarse en los casos en los que se solicitara el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez bajo la aplicación del pluricitado principio. Así mismo, determinó qué circunstancias daban lugar a que se implementara, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 para efectos del reconocimiento de este tipo de pretensiones respecto de aquellos afiliados en los que la invalidez hubiese acaecido en vigencia de la



Ley 860 de 2003, estableciendo un test de procedencia y de obligatorio acatamiento, el cual consta de los siguientes puntos: **1.** debe comprobarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: *(i)* analfabetismo, *(ii)* vejez, *(iii)* pobreza extrema, *(iv)* cabeza de familia, *(v)* desplazamiento o *(vi)* padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa. **2.** Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas. **3.** Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez. **4.** Debe evidenciarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Adicionalmente, también fundamentó esta regla de unificación en el hecho de que el Acto Legislativo 01 de 2005 se expidió con el fin de preservar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, privilegiando la aplicación de la norma vigente al acaecimiento de la contingencia protegida por cada subsistema, razón por la que habría una carga desproporcionada para las entidades y/o fondos de pensiones, ya que de no ponerse una limitante, no sería *"posible determinar, a ciencia cierta, el número de personas que pudieran reclamar, ad finitum"* el estudio de una norma cuya vigencia expiró hace más de dos décadas. Aunado a que también consideró que las expectativas legítimas de los afiliados no pueden ser inalterables como si fuesen derechos adquiridos. Dichas posibilidades surgían para quienes, habiendo reunido la densidad de semanas de cotización para pensionarse por invalidez en un régimen, su condición se

estructuraba en otro y veían resquebrajada la confianza legítima como destinatarios de esa primigenia norma.

Atendiendo dichos postulados, para el caso tampoco es posible darle aplicación al principio de la condición más beneficiosa en los términos expuesto, en tanto, antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, el señor Gustavo Bedoya solo cuenta con 23,43 semanas, lo cual es un número inferior a las 300 exigidas para entrar a analizar el test de procedibilidad, luego se confirma la sentencia en este apartado.

En el contexto de enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas, tanto la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral como la Corte Constitucional han establecido que es posible considerar distintas fechas para la estructuración de la invalidez, además de data formal de la misma. Estas pueden incluir (i) la de la calificación de dicho estado, (ii) la de la solicitud de reconocimiento pensional, o (iii) la de la última cotización realizada (véase entre otras las sentencias SL3275-2019, SL3992-2019, SL4567-2019, SL770-2020, SL409-2020, SL781-2021, SL1718-2021, SL2332-2021, SL2830-2021, SL4329-2021, SL5576-2021, SL002-2022, SL549-2023y la SU-588-2016). Lo anterior, dado que estas circunstancias permiten establecer que el afiliado, pese a la declaratoria formal determinada en un dictamen médico científico respecto a su condición para trabajar, conservó una capacidad laboral y por ello es dable fijar una fecha diferente para establecer el trienio en el que se debe verificar el requisito de las 50 semanas de cotización,

En el caso específico del demandante, en ninguna de las tres condiciones consideradas para el conteo de las semanas (calificación de la invalidez, solicitud de reconocimiento pensional y última cotización), cumple con el cúmulo de 50 cotización, en tanto, durante los tres años previos a dichas fechas, solo acredita 21,57 semanas de cotización. Por lo tanto, no se acreditan los requisitos de cotizaciones suficientes para acceder a la

pensión por invalidez, tal como lo establecen la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral y la Corte Constitucional.

Es importante señalar que el señor Gustavo tampoco satisface la exigencia del párrafo 2 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 01 de la Ley 860 de 2003, para el otorgamiento de la prestación pregonada, esto es: *"Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años"*, en tanto, en la actualidad, el número de semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez es de 1.300 semanas, correspondiendo el 75% de esta cifra a 975 semanas. Sin embargo, el demandante solo ha cotizado 727,86 semanas en total.

Finalmente, es importante señalar que, aunque en el recurso de apelación se argumenta que los últimos aportes 2020-2021, se realizaron después de que sufriera la amputación de pierna y que fueron efectuados por su familia para favorecerlo, para efectos del análisis de los requisitos y determinar el punto de partida para el cómputo de semanas cotizadas cuando de pensión de invalidez se trata, es la fecha de estructuración de la invalidez la que debe considerarse, y como para el caso se fijó para el 11 de abril de 2021, no es posible omitir los mismos y empezar el computo de las 50 semanas requeridas desde el 30 de septiembre de 2014 hacia atrás, tal y como se pretende, debiendo resaltarse que se han analizado todas las posibilidades normativas y jurisprudenciales existentes con el fin de establecer la procedencia del pago de la pensión, pero ninguna de ellas se satisfizo en el caso.

Consecuente con lo expuesto, se confirma la sentencia de instancia. Costas a cargo del recurrente, y en favor de la demandada, inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$1.160.000,00.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Gustavo Alonso Bedoya Muriel**, contra **Colpensiones**.

Costas a cargo del recurrente, y en favor de la demandada, inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$1.160.000,00.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijará por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Auto AL2550-2021.

**Las magistradas** (firmas escaneadas)



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**